SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 13/2013

Recomendación N°	13/2013
Autoridad Responsable	Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular
Expediente	1VQU-0263/2012
Fecha de emisión/	06 DE AGOSTO DE 2013
HECHOS	
<p>El Agravado se encontraba inscrito en la escuela secundaria “Dolores Herrera Viuda de Richard”, ubicada en la cabecera municipal de Rioverde, S.L.P. En la denuncia que presentaron Q1 y Q2, señalaron que desde inicios del ciclo escolar 2012-2013, su menor hijo fue agredido en diversas ocasiones por dos compañeros de clase, quienes procedían a sujetarlo de los brazos y piernas, colocándolo boca abajo, lo levantaban, mientras otro compañero le colocaba sus partes íntimas en su cuerpo, simulando un abuso sexual.</p> <p>Por tal motivo, Q1 y Q2, decidieron poner en conocimiento de esta situación a AR1, con el fin de que cesaran esos actos en perjuicio del agraviado, se sancionaran esas conductas y se tomaran acciones para prevenir una situación de mayor gravedad. Los quejosos manifestaron que la Directora del plantel hizo caso omiso para la solución de su problema, ya que solamente les recibió un documento en donde le solicitaban la implementación de talleres relativos a la violencia escolar o bullying, el cual fue entregado el 6 de septiembre de 2012, sin que se les otorgara una respuesta.</p> <p>Los quejosos agregaron que en octubre de 2012, su hijo les manifestó que sus compañeros seguían molestándolo, y que ahora le bajaban el pantalón y la trusa, efectuando sobre su cuerpo los mismos actos simulando una violación. Señalaron también que con motivo de esas agresiones V1 fue hospitalizado debido a la tensión emocional que presentó, posteriormente fue diagnosticado como paciente con diabetes mellitus tipo 1, explicándoles el Médico que se debió a la presión y al estrés al que estuvo sometido dentro del plantel educativo. Incluso recibió atención psicológica, como consecuencia del estrés postraumático que le ocasionaron sus compañeros durante el último año del ciclo escolar.</p> <p>Por lo anterior, Q1 y Q2 decidieron cambiar a la víctima de plantel educativo para que continuara con sus estudios; sin embargo, presentaron su queja por las omisiones de AR1, ya que tenía conocimiento lo que estaba aconteciendo con los alumnos dentro del plantel educativo, sin que realizara acciones para combatir este problema. Precisarons los quejosos que con motivo de estas agresiones se inició, se inició la Averiguación Previa 1 contra de los menores agresores, la cual se encuentra radicada en la Agencia del Ministerio Público Mesa 1, Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del municipio de Rioverde, dentro de la cual se observó que AR1, no otorgó facilidades para la investigación, ya que negó la realización de una inspección por parte de la Representación Social en las instalaciones del plantel educativo a su cargo.</p>	
Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la integridad y seguridad personales. ✓ A la igualdad y al trato digno.
OBSERVACIONES	
<p>Esta Comisión Estatal no se pronuncia sobre las actuaciones realizadas dentro de Proceso Especial 1, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia con sede en Rioverde, San Luis Potosí, por carecer de</p>	

competencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

De la evidencia recabada se observó, que el 7 septiembre de 2012, Q1 y Q2 presentaron un escrito a AR1, Directora de la secundaria, en el que hicieron de su conocimiento, acerca de la problemática de violencia escolar dentro del plantel educativo, y de la cual su hijo estaba siendo víctima, sufriendo agresiones físicas y verbales por parte de sus compañeros. Al respecto, la autoridad señalada como responsable reconoció que los padres del agraviado le hicieron del conocimiento del acoso escolar de que estaba siendo víctima por parte de sus compañeros.

Es de llamar la atención que fue hasta el 8 de octubre de 2012, cuando la autoridad escolar comienza a impartir talleres solicitados Q1 y Q2 sobre el tema de prevención de la violencia escolar; sin embargo, no se advierten de acciones que se hayan iniciado para otorgar protección o seguridad a la integridad de V1, no obstante que existía evidencia de que las agresiones hacia V1, por parte de sus compañeros de clase se habían agudizado, a tal grado que requirió hospitalización debido al cuadro de estrés que presentaba. Como consecuencia de ello se le diagnosticó diabetes mellitus tipo I, por lo cual inició tratamiento a base de insulina, lo cual generó un detrimento en su calidad de vida.

La víctima detalló que el tipo de acoso escolar era a través de un mecanismo que denominan “la violadora”, el cual consistía en que los estudiantes señalados como agresores lo sujetaban de los brazos para inmovilizarlo, mientras otros de ellos frotaban sus partes íntimas en contra su cuerpo, simulando en todo momento un abuso sexual, lo cual, refirió el agraviado, lo hacían frente al resto de sus compañeros del grupo quienes se burlaban de esta circunstancia.

Se observó que Q1 y Q2, desde el inicio del ciclo escolar, solicitaron el apoyo de T1, en su carácter de Presidente de la Asociación de Padres de Familia de Rioverde, quien los orientó que en primer término para que acudieran con AR1; sin embargo, toda vez que las agresiones hacia V1 continuaban, el 7 de septiembre de 2012, T1 acompañó a los padres de V1 a hablar con AR1, quien por encontrarse en una reunión se molestó y argumentó que atendería el asunto y después les informaría los resultados obtenidos.

No obstante lo anterior, de los datos que se aportaron al expediente de queja, se advirtió que AR1 no llevó a cabo ninguna acción para dar protección a la integridad de la víctima o para evitar que continuaran las agresiones en su contra, ya que a pesar de tener conocimiento de los hechos, V1 manifestó que sus compañeros seguían con las acciones de violencia. Incluso, es de llamar la atención que la orden para la aplicación de la plática sobre valores para prevenir la violencia escolar, AR1 la haya enviado en una hoja de libreta, escrita a lápiz, tal como lo indicó AR2 en la declaración que rindió en la Averiguación Previa 1.

De la información que proporcionó la autoridad, no se desprenden acciones realizadas por AR1, para prevenir o corregir el caso denunciado, pues si bien es cierto que se impartieron talleres a alumnos y padres de familia de la escuela secundaria, también lo es que se trató de plática sobre valores, sin que se observado otros cursos, ni mostrado los resultados con motivo de las pláticas, ya que en el estudio posterior que se realizó en la escuela

secundaria, la sensación sobre violencia escolar entre los alumnos se encontró en un porcentaje elevado.

Se evidenció que AR1, a quien se le dio a conocer a tiempo la problemática de violencia dentro del plantel educativo a su cargo, fue omisa en preservar la integridad física y psicológica tanto de V1 como de los demás alumnos de esa institución educativa, lo cual constituye una vulneración a los derechos humanos reconocidos en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual en el presente caso no ocurrió ya que no se realizaron las acciones necesarias para que cesaran las agresiones o los actos de abuso en contra de V1, lo que a la postre le generó un daño en su salud física y psicológica.

La omisión en que ocurrió AR1 es relevante, ya que V1 se encontraba bajo su cuidado, tomando en consideración que los eventos de acoso escolar se suscitaron en horario escolar, surgiendo así, un deber de cuidado en su posición de garante que la convierte en responsable por el daño emocional sufrido por V1. Este deber de cuidado obligaba a AR1 a actuar con absoluta diligencia, es decir, tenía el deber de actuar en consecuencia, de realizar acciones a fin de evitar los abusos que se estaban cometiendo en agravio de V1, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva de su parte.

La conducta de AR1, provocó indirectamente que V1 tuviera complicaciones en su salud del tipo diabetes mellitus, a causa de la omisión y de la negligencia para atender su responsabilidad en el servicio público y en el cuidado de la víctima que su condición de menor de edad y alumno dentro de un plantel educativo exige a quienes tienen a su cargo la integridad y seguridad de los alumnos. Esa omisión provocó que el agraviado tuviera que atravesar circunstancias que le implicaron un sufrimiento físico y psicológico que finalmente le generaron un daño en su salud, tal como se corroboró con el expediente clínico de la atención médica que recibió V1 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de las constancias que acreditan el tratamiento psicológico que recibe.

La valoración psicológica que se practicó a V1, así como la opinión técnica que en materia de psicología le practicó personal de este Organismo, coinciden en señalar que presenta una afectación grave en su esfera psicoemocional, debido a la sensación de inadecuación con sus pares, lo cual no le permite establecer relaciones interpersonales ante la falta de confianza hacia las personas por el temor a ser agredido nuevamente.

Cabe resaltar que si bien es cierto que AR1 no pudo haber previsto el resultado que se generó en la salud de V1, también lo es que su omisión de auxilio y de actuar de manera oportuna, repercutió en la salud de agraviado, ya que de acuerdo con la evidencia, el agraviado padece diabetes mellitus tipo I, que se generó por el estrés derivado de la situación de acoso que sufrió en el centro escolar, lo cual pudo evitarse de haberse actuado desde el momento en tuvo conocimiento de los hechos.

Omitió también proteger de toda forma de maltrato, daño, agresión o abuso que afectara su integridad física o mental, así como garantizar la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, atendiendo al interés superior del niño, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafos sexto y séptimo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 6 y 10 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, que establecen la obligación de los servidores públicos de cumplir con la satisfacción de las necesidades para el desarrollo integral y promoción del respeto a la dignidad de la niñez, dando prioridad a su bienestar en todas las circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su perjuicio.

Por otra parte, llama la atención que AR2, en su declaración ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Mesa 1 Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia con sede en Rioverde, se ostentó como Psicóloga de la escuela secundaria; sin embargo, se advirtió que no cuenta con cédula profesional para el ejercicio de esa licenciatura. Lo grave de ello es que realiza tareas en materia de psicología en el centro escolar, y como ella reconoce, entró a laborar en enero de 2010, y que comenzó a tramitar su cédula profesional en diciembre de 2011, lo cual sin duda debe investigarse para que se aclare este aspecto.

También se observó que AR2, aplicó terapia a dos de los Estudiantes señalados como agresores de V1, reconociendo que no elaboró ningún dictamen de conducta ni que las terapias hayan estado dirigidas sobre la problemática de la violencia escolar, aduciendo como argumento que la víctima había solicitado privacidad. De acuerdo con la declaración que AR2 rindió dentro de la Averiguación Previa 1, su trabajo con los dos estudiantes señalados por el acoso escolar fue de orientación pedagógica y no sobre violencia escolar. Por tal motivo, se considera indispensable se investigue esta circunstancia, particularmente sobre la contratación de persona que tiene a su cargo el trato con menores de edad en los centros escolares, aduciendo contar con alguna profesión que no acredita.

Esta Comisión Estatal considera que la eficaz y oportuna protección del interés superior del niño se garantiza con la intervención de personal adecuado, es decir, como en el caso que nos ocupa del área psicológica de la escuela secundaria, la persona que ahí se integre debe acreditar haber cursado la carrera profesional y contar con título y cédula profesionales, además del perfil para trabajar con niños de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo; debiendo también demostrar que tiene conocimientos básicos para desempeñarse en una institución educativa y cuenta con las habilidades para el puesto.

Por lo antes expuesto, se observó que se vulneraron en agravio de V1 los derechos humanos a un trato digno y a la integridad y seguridad personales, contemplados en los artículos 1, párrafo tercero, 16, párrafo primero, 19, párrafo séptimo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se incumplió con el deber que de brindar la protección integral para salvaguardar la integridad física y mental que requería el agraviado.

También se vulneró lo dispuesto en los artículos 4, fracciones II y VI, 10, 11 y 18 de la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, que en términos generales señalan que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno, el interés superior de la infancia y la adolescencia implica dar prioridad a su bienestar, que debe tener una vida libre de violencia, que es obligación de los docentes protegerlos contra toda forma de abuso o violencia y de implementar medidas para evitar cualquier forma de maltrato, tanto físico como verbal durante el horario de sus actividades escolares, y del deber de denunciar ante autoridad competente cualquier acto que atente contra la dignidad o su integridad.

Ahora bien, de acuerdo con la Ley de Prevención Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí, son auxiliares en materia de prevención escolar en los planteles educativos, los llamados “comités de protección civil y seguridad escolar”, los cuales de acuerdo a los artículos 21 a 27 del ordenamiento en cita, en cada escuela de educación pública debe constituirse uno, el cual deberá estar integrado por la mitad más uno de los padres de familia y alumnos, al cual corresponde elaborar un diagnóstico de riesgo del plantel, instrumentar un programa de medidas de seguridad y protección, denunciar cualquier acto de violencia, canalizar los requerimientos para la prevención escolar entre otras.

El artículo 28 del ordenamiento antes señalado, establece que es obligación de los directores de los planteles escolares propiciar el respeto a la dignidad de los alumnos y fomentar la convivencia basada en la confianza y el respeto mutuo, circunstancia que se advirtió en la presente que la autoridad educativa no observó en el presente caso.

Tampoco se aportaron elementos para acreditar que en la escuela secundaria “Dolores Herrera Viuda de Richard”, se hubiera constituido el comité de protección civil y seguridad escolar, ni que cuente con reglamento o protocolo de seguridad escolar que prepare o prevenga al personal educativo y a los alumnos para enfrentarse ante situaciones de acoso escolar o de otra índole que pongan en peligro la seguridad, la salud, la integridad o la vida de quienes se encuentran dentro del plantel educativo. Es por ello que se deben emprender acciones para el diseño de protocolos que permitan identificar, evaluar y atender situaciones que pongan en riesgo la integridad de los alumnos en los centros escolares.

Es indudable que a través de un instrumento de esta naturaleza se lograría que el personal escolar atienda de manera efectiva los riesgos eventuales, las actividades que deben emprender y tomando conciencia de su importante papel en la prevención y atención de la violencia escolar.

Estos protocolos deben incluir cursos de capacitación dirigidos tanto al personal académico, como a los padres de familia y alumnos, así como métodos de vigilancia continua. Aunado a ello, con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y las obligaciones que se contraen del mismo, así como del respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que repare el daño ocasionado, que se traduzca en una compensación justa, que incluya tratamiento médico a V1 así como atención psicológica para V1, Q1 y Q2.

SEGUNDA. Gire las instrucciones a efecto de que el Órgano de Control Interno determine a la brevedad el Expediente Administrativo 1, remitiéndole también copia de la presente Recomendación para que se agregue al mismo y se tomen en cuenta las consideraciones que en ella se exponen.

TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación al personal docente y administrativo de la escuela secundaria “Dolores Herrera Viuda de Richard”, en materia de prevención y seguridad escolar, derechos humanos y sobre prevención de la violencia escolar.

CUARTA. Con base en la Ley de Prevención Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se integre el comité de protección civil y seguridad escolar en la escuela secundaria “Dolores Herrera Viuda de Richard”, a fin de fortalecer los factores de protección en favor de los alumnos de ese plantel educativo.

QUINTA. En el ámbito de las atribuciones conferidas se analice la pertinencia de que la escuela secundaria “Dolores Herrera Viuda de Richard” cuente con lineamientos o protocolos en materia de prevención y seguridad escolar.